

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE REPARACIONES EXTRAJUDICIALES, Y LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD QUE CORRESPONDEN A LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR, PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA 5/2000 REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS

PRIMERA. Objeto.

El objeto del presente contrato es la gestión integral del servicio de reparaciones extrajudiciales y de la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad, que corresponden a la AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR (en lo sucesivo la Agencia) y destinada a la atención de los menores a los que los jueces de menores hayan acordado medidas judiciales no privativas de libertad previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

SEGUNDA. Descripción de los servicios.

En conjunto, se trata de garantizar la ejecución de la prestación del servicio que consistirá en la realización de las reparaciones extrajudiciales a las que se refiere el artículo 19 de la L.O. 5/2000, de 12 de enero. Se trata de actuaciones que se ejecutan como consecuencia de los procesos establecidos en el ámbito de la responsabilidad penal de los menores, que promovidos por el Ministerio Fiscal consisten en la conciliación y la realización material de los acuerdos de reparación del daño, de reparación social o mediante la realización de una actividad educativa determinada, según queda regulados en el artículo 5 del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la L.O.5/2000, de 12 de enero.

Igualmente se garantizará la ejecución de las medidas judiciales no privativas de libertad, establecidas en el artículo 7 de la citada L.O. 5/2000, de 12 de enero.

Para ello, las intervenciones profesionales se llevarán a cabo, preferentemente, en el entorno social más próximo de los menores y jóvenes, así como en los inmuebles aportados por la entidad adjudicataria.

Cada persona menor infractora tendrá asignada un profesional de la entidad adjudicataria que se responsabilizará de la ejecución de la medida judicial impuesta, y será su referente principal y el encargado de potenciar sus recursos personales para desenvolverse en la sociedad, así como de conseguir que asuma la responsabilidad penal atendiendo al delito cometido. Lo mismo será de aplicación para el supuesto de las reparaciones extrajudiciales.

El profesional asignado derivará al menor infractor a aquellos recursos comunitarios que considere necesarios: sanitarios, educativos, formativos, laborales o de ocio, con los que se coordinará para facilitar su proceso de socialización e integración y su desvinculación de las conductas delictivas. Todo ello con el objetivo de afianzar al menor infractor o infractora en los circuitos sociales normalizados prevenir la reincidencia.

Para el caso de reparaciones extrajudiciales y desarrollos educativos, se desarrollarán en las instalaciones descritas en el PCAP en donde se llevarán a cabo tanto las actividades dirigidas a la reparación extrajudicial, así como otras de carácter socioeducativo especialmente indicadas para los menores que presentan dificultades en su desarrollo personal, formativo y social.

Asimismo, el Proyecto educativo de la entidad adjudicataria contará con la programación, metodología y desarrollo de los procedimientos e instrumentos técnicos necesarios para la intervención preventiva con menores que cumplan medida judicial no privativa de libertad, o que tengan que realizar tareas socioeducativas o para las reparaciones extrajudiciales.

Paralelamente a todo lo anterior, es imprescindible el asesoramiento, apoyo e intervención con la familia, potenciando su implicación en todo el proceso. Para ello, el profesional de referencia deberá conocer en profundidad la dinámica familiar, el sistema normativo y de reforzamientos, así como el estilo educativo y comunicativo familiar de cada menor infractor atendido. El objetivo será promover los cambios que permitan mejorar las relaciones

intrafamiliares, las pautas educativas y la comunicación de la familia con la persona menor infractora, dotando a los familiares de herramientas para afrontar las situaciones conflictivas.

Al finalizar la medida, el profesional de referencia realizará la derivación a los servicios sanitarios o sociales comunitarios en los casos en que se valore la necesidad de un seguimiento de la persona menor infractora o de la familia, todo ello con objeto de garantizar la continuidad de las actuaciones iniciadas durante la ejecución de la medida.

En el mismo sentido, en los casos concretos en los que la persona menor infractora previamente haya cumplido una medida de internamiento, o en los casos de sustitución de la medida de medio abierto por una de internamiento, el profesional de referencia se coordinará con el equipo técnico de los centros de internamiento para favorecer la continuidad de la intervención con el menor infractor o infractora.

La capacidad de atención para este contrato se estima en 800 menores y jóvenes infractores, y 1.000 medidas, durante su periodo de ejecución.

TERCERA. Duración del contrato.

La duración del contrato será de dos (2) años, prorrogables siempre dentro del plazo máximo inicial, en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2028.

CUARTA. Recursos humanos

La entidad adjudicataria deberá contar en todo momento con trece (13) profesionales respetando la distribución de los mismos que seguidamente se indica a los efectos previstos en la letra f) del artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP). Cualquier cambio que se lleve a cabo en la composición del personal – que en ningún caso podrá afectar a su distribución ni disminuir su número mínimo – será excepcional y expresamente motivado.

Distribución de profesionales:

- Una (1) persona encargada de la Dirección-Coordinación del equipo, que contará con titulación universitaria de Grado en Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía, o titulación universitaria oficial equivalente perteneciente al ámbito de las Ciencias Sociales o de la Educación, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Una (1) persona con la titulación de Grado en Psicología o equivalente.
- Once (11) personas con titulación de Grado en Educación Social o equivalente, o que cuenten con titulaciones universitarias de carácter oficial de la rama de las Ciencias Sociales y Jurídicas o Ciencias de la Educación.

En todo caso, los citados profesionales deberán acreditar experiencia mínima de dos (2) años en intervención con personas menores en riesgo de exclusión o conflicto social. La experiencia podrá ser laboral, o acreditarse a través de prácticas y voluntariado posteriores a la obtención de la titulación exigida.

Estos profesionales a los que se ha hecho anterior referencia tendrán contrato a tiempo completo y en exclusividad (a excepción de la dirección-Coordinación) para la ejecución del presente contrato, sin que puedan ser compartidos con otros centros o servicios propios de la entidad adjudicataria no comprendidos en el presente pliego o de cualquier otra con la que ésta tenga vinculación, u otras áreas de la Administración. Todos ellos actuarán bajo secreto y sigilo profesional.

El conjunto de profesionales que la entidad adjudicataria destine a la ejecución de los trabajos dependerá exclusivamente de la misma, ejerciendo la adjudicataria todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleadora de dichos profesionales. Por lo tanto, la Agencia será ajena a las relaciones laborales que por tal motivo pudieran generarse, actuando únicamente como órgano contratante, sin asumir funciones de dirección del personal, de manera que no existirá ningún tipo de relación jurídica entre los profesionales de la entidad adjudicataria y esta Administración.

La responsabilidad social, laboral, o de cualquier otra índole derivada del personal contratado por la adjudicataria para la prestación del servicio corresponderá, única y exclusivamente, a la misma.

Así, mientras que de manera general cabe significar que a la entidad adjudicataria corresponde mantener y ejercer la dirección y organización de la ejecución del contrato, y a esta Agencia la supervisión y control de la misma, así como de todas aquellas funciones que impliquen el ejercicio de autoridad pública, de manera particular se articulan los siguientes extremos en orden a garantizar que, por ambas partes, todos los niveles de gestión se atenderán a unas mismas normas de conducta:

1.- Los responsables y personal de esta Agencia se abstendrán de realizar, durante toda la ejecución del contrato y su posible prórroga, acto alguno que interfiera en el poder de dirección que corresponde a la entidad adjudicataria, o de las facultades y obligaciones que le corresponden como empleador.

2.- La ejecución del contrato de servicios no supondrá cesión de titularidad, por lo que los profesionales del adjudicatario no podrán, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, asumir funciones reservadas a los funcionarios de esta Administración.

3.- Durante todo el período de gestión del contrato y su posible prórroga, la entidad adjudicataria, además de asumir su riesgo empresarial, ejercerá de modo real y efectivo el poder de dirección inherente a todo empresario en relación a sus trabajadores y trabajadoras, asumiendo: la negociación y pago de los salarios; el establecimiento de horarios y turnos; la concesión de permisos, licencias y vacaciones; sustituciones; imposición, cuando proceda, de sanciones disciplinarias; cuantos efectos de Seguridad Social se deriven, en particular el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, y en general todos los derechos y obligaciones que se deriven de la relación contractual entre empleador y empleado.

4.- Las relaciones sindicales del personal de la entidad adjudicataria se sustanciarán exclusivamente con ésta, sin que la Agencia intervenga en modo alguno en dichas relaciones.

5.- Esta Administración designará una persona responsable del contrato, a quien corresponderá la relación ordinaria con la entidad adjudicataria, y a través de la cual se canalizarán todas las comunicaciones e instrucciones que deban hacerse llegar a la misma, a quien podrá solicitar, en cualquier momento, la información que se precise sobre la ejecución del contrato y del cumplimiento de sus obligaciones como contratista.

6.- Por su parte, en nombre de la entidad adjudicataria la persona que desempeñe el puesto referido a la Dirección-Coordinación, será la encargada de responder a las incidencias que puedan producirse, y ejercerá como único interlocutor entre dicho equipo de profesionales y la Agencia. Así, en virtud de las instrucciones que reciba de la persona responsable del contrato a la que se refiere el apartado precedente, dirigirá y organizará la actividad y el trabajo e impartirá directamente las órdenes e instrucciones al resto de trabajadores de la entidad.

1. Registro de Personal

Antes de la formalización del oportuno contrato de trabajo y, consecuentemente, con carácter previo al inicio de la ejecución del servicio, la entidad que resulte adjudicataria aportará:

- Una declaración responsable que contendrá la relación, suscrita por la persona representante legal de la entidad adjudicataria, en la que se detallarán cuáles son las personas trabajadoras que vayan a prestar sus servicios, con indicación de sus nombres y apellidos, NIFs, categorías profesionales bajo las que se contraten, tipos de contrato, puestos de trabajo que ocupen y jornada laboral.

A esta relación se acompañarán, con referencia a cada profesional relacionado, documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos establecidos en este PPT en cuanto a titulaciones y experiencia; documentos de afiliación y alta, de cada uno de dichos profesionales, en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social, así como certificación negativa, de cada profesional, emitida por el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia, tal y como exige el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de

enero, de Protección Jurídica del Menor, al comportar la ejecución del servicio contacto habitual con personas menores.

Una vez iniciada la ejecución del servicio, con carácter trimestral (siendo el primer trimestre afectado por la presentación el natural inmediatamente siguiente a aquél en que comience la prestación del servicio), y durante toda la vigencia del contrato y su posible prórroga, la persona representante legal de la entidad adjudicataria presentará, ante el órgano responsable del contrato, en los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del trimestre de que se trate, Declaración Responsable (en adelante DR) en la que manifestará:

A.- Que no se ha producido ningún cambio en el equipo de profesionales que integran el servicio, con respecto a la composición de dicho equipo inicialmente declarada; o bien,

B.- Los cambios que se hubiesen podido producir en la composición de la plantilla de personal del Servicio comunicada inicialmente o en anteriores DRs, con expresión de los motivos excepcionales en los que se basen dichos cambios, con indicación – en referencia al nuevo personal – de los datos a los que se ha hecho anterior mención de nombre y apellidos, NIFs, categorías profesionales bajo las que se contraten, tipos de contrato, puestos de trabajo que ocupen y jornada laboral, y certificaciones negativas emitidas por el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano de contratación podrá requerir, de forma motivada y en cualquier momento, la exhibición de los documentos originales o el cotejo de las copias aportadas, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas razonables sobre la autenticidad o calidad de la documentación presentada.

La entidad adjudicataria garantizará que las bajas que se produzcan entre el personal por vacaciones, enfermedad, licencias, permisos u otras causas, se sustituirán para que no supongan menoscabo en la prestación del servicio.

Si de la valoración, por parte del órgano responsable del contrato, de la documentación aportada por la adjudicataria, referida a los certificados negativos citados, así como al cumplimiento de los requisitos previstos en este PPT en cuanto a titulaciones y experiencia, resultase la no adecuación o idoneidad de alguno o algunos de los profesionales integrantes del servicio, lo pondrá en conocimiento de la contratista a efectos de su inmediata sustitución, en orden a dar exacto cumplimiento a lo previsto al efecto en este PPT

Prácticas profesionales.

En las instalaciones y recursos aportados por la entidad adjudicataria sólo podrán realizarse prácticas externas, curriculares y extracurriculares, en el marco de los convenios de colaboración suscritos al respecto por la Agencia con las Universidades.

Estas prácticas podrán ser realizadas por el alumnado matriculado en estudios universitarios oficiales de grado, máster o doctorado en las áreas de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud y Ciencias de la Educación, que imparten las Universidades madrileñas.

En todo caso, para la realización de estas prácticas se deberá contar con la previa conformidad de la entidad adjudicataria.

QUINTA. Requisitos de la prestación del servicio.

1. Relativos a las instalaciones donde se preste el servicio.

La entidad adjudicataria deberá disponer de tres inmuebles cuya localización se situará en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la localización geográfica de los recursos y la mayor población atendida por la Agencia en 2024 y 2025 y distribuidos conforme a lo dispuesto en el apartado 10.2.B.4 del cuadro de características del contrato, y debiendo localizarse necesariamente uno de ellos en el municipio de Madrid.

Se garantizará la accesibilidad a los tres inmuebles mediante medios de transporte público.

Ubicación de inmuebles
1 en Alcalá de Henares+1 en Parla+1 en Madrid capital
2 en Madrid capital + 1 en otro municipio ubicado en la Comunidad de Madrid, diferente a Madrid y que sea municipio de gran población
3 inmuebles situados cada uno de ellos en diferentes Municipios de la Comunidad de Madrid, uno de ellos en Madrid capital y dos en un área metropolitana (corona metropolitana)

El conjunto de recursos para la realización de las reparaciones extrajudiciales, así como las actividades socioeducativas y de apoyo a los menores y jóvenes infractores estarán dotados, como mínimo, del espacio, del mobiliario y los enseres precisos para la atención de los menores y jóvenes infractores derivados y el desarrollo de las actuaciones o las actividades que tengan que llevarse a cabo por el servicio prestado en cada caso. Asimismo, cada una de las instalaciones puestas a disposición por la entidad adjudicataria, deberá contar al menos con un despacho para la realización de intervenciones individuales con el psicólogo y con espacio para la realización de intervenciones grupales y actividades socioeducativas.

La entidad que resulte adjudicataria deberá presentar, en el momento de la formalización del contrato, una declaración responsable firmada por su representante legal justificativa de que los inmuebles cumplen con todos los requisitos legales, tanto generales como sectoriales, de aplicación al uso para el que se destina, así como de que cumple con lo establecido en este PPT y que cuenta con las correspondientes autorizaciones administrativas. A la declaración responsable deberán acompañar los planos de las instalaciones. Asimismo, deberá aportar documentación acreditativa de la disponibilidad de uso de las instalaciones (nota simple registral o contrato de arrendamiento).

En el caso de ser necesaria la realización de obras, cuyo coste sería de cuenta íntegra de la entidad adjudicataria, se deberá presentar el correspondiente proyecto básico y de ejecución donde se refleje el alcance de las mismas, y se justifique el cumplimiento de las condiciones expresadas en el párrafo anterior.

2. Relativos a los servicios que han de prestarse y su descripción.

En los respectivos recursos se prestarán los servicios determinados en cada uno de ellos, y se ajustarán a las actuaciones ofertadas por la entidad adjudicataria, los cuales serán considerados como anexos inseparables de los respectivos contratos y parte de los mismos.

Los menores y jóvenes infractores a atender para la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad que constituyen el objeto del presente contrato, así como para la realización de reparaciones extrajudiciales, serán designados por la Agencia. En cualquier caso, la atención a los menores y jóvenes deberá ajustarse a las prescripciones contenidas en la L.O. 5/2000, de 12 de enero, y las modificaciones posteriores, en el R.D. 1774/2004, de 30 de julio, así como en los reglamentos posteriores que las desarrollen, en especial las relativas a los derechos de los menores y a la exigencia de sus obligaciones.

2.1. Realización de las reparaciones extrajudiciales.

Los profesionales designados por la entidad adjudicataria llevarán a cabo todas las instrucciones de la Agencia, así como el cumplimiento de las obligaciones profesionales relativas al desarrollo de las actuaciones educativas para las reparaciones extrajudiciales encomendadas por el Ministerio Fiscal.

Tanto los programas a llevar a cabo como la implementación de las actuaciones a desarrollar, así como las actividades y los espacios en los que se desarrollen tendrán que ser puestos en conocimiento de la Subdirección General de Ejecución de Medidas Judiciales de la Agencia.

2.2. Ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad

Los profesionales designados por la entidad adjudicataria llevarán a cabo todas las instrucciones de la Agencia, así como el cumplimiento de las obligaciones profesionales relativas a la ejecución de las medidas judiciales no privativas de libertad.

Los programas de ejecución de la medida tendrán que ser puestos en conocimiento de la Subdirección General de Ejecución de Medidas Judiciales, así mismo las pautas, criterios e intervenciones profesionales que se lleven a cabo en el desarrollo de las actuaciones correspondientes a cada caso.

Para las Prestaciones en Beneficio de la Comunidad, la entidad adjudicataria facilitará los medios oportunos y necesarios para el cumplimiento de la medida, así como los acuerdos oportunos con otras entidades de interés social, bajo la supervisión de la Subdirección General de Ejecución de Medidas Judiciales.

2.3. Actividades socioeducativas

El seguimiento y apoyo individualizado requiere de la programación de un conjunto de actividades socioeducativas y terapéuticas a desarrollar tanto en el propio recuso de la entidad adjudicataria, como en otros recursos comunitarios.

Estas actividades socioeducativas requieren de una programación adaptada a las distintas circunstancias en las que previsiblemente tengan que implementarse, de acuerdo con el artículo 21 del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio.

A título de ejemplo, se realizarán alguna/s de las siguientes:

- a) Actividades de desarrollo personal y de la competencia social.
- b) Prevención de la violencia en distintos ámbitos.
- c) Educación en valores.
- d) Actividades de apoyo escolar, alfabetización y castellano para extranjeros.
- e) Actividades aprendizaje y prevención en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
- f) Educación para la salud.
- g) Prevención del consumo de drogas.
- h) Tratamiento de las adicciones.
- i) Educación y seguridad vial.

- j) Educación afectiva-sexual.
- k) Motivación, orientación e inserción sociolaboral.
- l) Actividades culturales, deportivas, y de ocio y tiempo libre.
- m) Realización de actividades y tareas educativo-medioambientales y educativo-asistenciales.
- n) Orientación personal y apoyo sociofamiliar.
- o) Todas aquellas que se consideren adecuadas para el proceso de desarrollo y socialización de los adolescentes.

2.4. Actividades de apoyo psicológico y familiar

Se prestarán también este tipo de actividades que consistirán en:

- a) Orientación y apoyo personal
- b) Orientación, apoyo y mediación familiar

2.5. Supervisión y control de los menores y jóvenes atendidos.

En atención al número de menores atendidos y de las medidas a ejecutar en cada momento, se establecerá por la entidad adjudicataria las normas y horarios a que deberá ajustarse la utilización de todas las dependencias y los recursos para la realización de las reparaciones extrajudiciales, así como las actividades socioeducativas y de apoyo a los menores y jóvenes infractores, y demás medidas judiciales, previa autorización de la Subdirección General de Ejecución de Medidas Judiciales.

2.6. Intervención preventiva con menores y jóvenes

Asimismo, la entidad adjudicataria establecerá los programas preventivos indicados desde una perspectiva sociocomunitaria, así como las pautas de intervención y evaluación en los casos de menores y jóvenes en conflicto social, y sus familias.

3. Intervención

3.1 Proyecto socioeducativo integral

El proyecto socioeducativo integral es el documento que define la identidad del servicio,

recoge los valores propios de éste, articula el marco legal, administrativo y teórico de la intervención con las personas menores infractoras y define su misión y objetivos. Asimismo, establece la metodología de trabajo, describiendo su estructura organizativa y funcional.

Desarrollará un sistema de evaluación integral y sistemático que permita la valoración de sus objetivos y contribuya a la mejora continua del servicio.

El Proyecto seguirá la siguiente estructura:

- 1.- Introducción.
- 2.- Marco de la Intervención.
 - 2.1. Marco legal.
 - 2.2. Marco administrativo.
 - 2.3. Perfil de la población.
- 3.- Marco y fundamentación teórica.
- 4.- Objetivos: generales y específicos.
- 5.- Intervención:
 - 5.1. Metodología.
 - 5.2. Programas de intervención:
 - Generales, por áreas
 - Específicos, por delitos
- 6.- Organización y gestión del Servicio
 - 6.1. Recursos humanos.
 - 6.2. Recursos materiales.
- 7.- Sistema de evaluación.
- 8.- Normativa de funcionamiento interno.
- 9.- Relaciones y coordinación con otras instituciones públicas y privadas.

3.2 Programas de intervención

La intervención en el servicio estará basada en una metodología estructurada, debiendo usar procedimientos estandarizados con objetivos operativos y claros que permitan evaluar su eficacia.

Deberán tener un enfoque multidisciplinar que permita una intervención integral y flexible.

Los programas de intervención de menores infractores e infractoras deberán ser planificados, diseñados y ejecutados por los profesionales de la entidad adjudicataria atendiendo expresamente a su evaluación.

Los programas de intervención tendrán preferentemente la siguiente estructura:

- a) Objetivos generales
- b) Objetivos específicos
- c) Actividades asociadas a cada uno de los objetivos específicos
- d) Responsable/s de llevar a cabo las actividades.

El establecimiento de las actividades y actuaciones concretas a desarrollar, en relación con cada uno de los objetivos propuestos, debe incluir todos los aspectos relevantes para su puesta en práctica:

- Contenido, directamente relacionado con el objetivo que se persigue
- Duración
- Recursos disponibles
- Lugar de realización
- Horarios
- Responsable

3.2.1 Programas de carácter general

Los programas de carácter general se organizarán por áreas y cubrirán aspectos relacionados con la familia y con la persona menor infractora, tales como, y a título de ejemplo, el desarrollo y la competencia socio-personal, la educación para la salud, el ámbito formativo y ocupacional, la organización del tiempo libre y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Estos

contenidos pueden desarrollarse como programas generales independientes o desarrollarse de forma transversal, lo que en todo caso quedará reflejado en el proyecto educativo.

3.2.2 Programas específicos

En el Servicio se desarrollarán programas especializados que se organizarán según el tipo de delito cometido y que se deberán ajustar a las necesidades específicas del perfil de la persona menor infractora.

3.3 Ejecución de las medidas

La entidad adjudicataria aceptará la designación de menores que indique la Agencia, e incorporará el expediente único de la persona menor infractora al sistema de información y gestión a través de la aplicación informática puesta a disposición por la Agencia.

Durante la ejecución de la medida, la Agencia será el interlocutor con los Juzgados de Menores y las Fiscalías de Menores, canalizándose a través de dicho órgano la documentación e información, salvo que los referidos Juzgados y Fiscalías realicen algún requerimiento directo a la entidad adjudicataria debiendo ponerlo en inmediato conocimiento de la Agencia.

Así mismo la entidad adjudicataria deberá comunicar inmediatamente a la Agencia cualquier incidencia significativa que afecte tanto a las personas menores infractoras atendidas, como a la organización y funcionamiento del servicio contratado y que pudiera conllevar irregularidades en la prestación del mismo.

Los profesionales de la entidad adjudicataria serán los encargados de la elaboración de los programas e informes de ejecución de la medida de cada menor infractor o infractora, en los plazos reglamentarios.

Las actuaciones, programas, pautas, criterios e intervenciones profesionales que se lleven a cabo se realizarán atendiendo a los programas aprobados por la Agencia, tanto generales, como

específicos, en su caso. En todo caso, se cumplimentarán los datos en las aplicaciones que la Agencia ponga a disposición de la entidad adjudicataria.

De igual manera, estos profesionales deberán seguir las directrices e instrucciones marcadas por la Agencia, suministrando toda la información que le sea solicitada.

La entidad adjudicataria, así como las personas trabajadoras de la misma deberán guardar durante la ejecución del contrato y a la finalización del mismo, la máxima reserva y confidencialidad en cuanto a los datos, documentos, metodologías, claves, análisis, programas y demás información a la que tengan acceso durante su relación con el servicio, atribuyéndose a esta obligación el carácter de esencial, a los efectos previstos en la letra f) del artículo 211 LCSP.

4. Relativos al funcionamiento de los recursos y a la prestación del servicio.

4.1 Las instalaciones destinadas por la entidad adjudicataria destinadas a la prestación del servicio funcionarán durante todos los días de vigencia del contrato, preferentemente en horario de 9.30 a 20.30h. Los sábados y domingos el horario de funcionamiento será de 09.30 a 15.00h.

El horario señalado podrá modificarse en los términos establecidos en el punto 2.5 del presente pliego.

4.2 Las relaciones entre la entidad adjudicataria y la Agencia, en cuanto a la prestación del servicio, se canalizarán principalmente a través del responsable del servicio designado al efecto por aquella, que responderá ante la Agencia de la prestación realizada en cada uno de los recursos asignados a la ejecución del contrato; ello sin perjuicio de las comunicaciones que se realicen entre los técnicos de la entidad adjudicataria y la Subdirección General de Ejecución de Medidas Judiciales en relación con el funcionamiento ordinario y diario de la prestación del servicio.

- 4.3 Serán vinculantes para la Entidad todas las decisiones adoptadas por la Agencia relacionadas con la prestación del servicio contratado.
- 4.4 La entidad adjudicataria tiene la obligación de comunicar de forma inmediata a la Agencia y, en su caso, al Juzgado, Fiscalía de Menores y Policía cualquier incidencia relativa a la ejecución de la medida o su incumplimiento.
- 4.5 La entidad adjudicataria deberá llevar a cabo las actuaciones necesarias tendentes a:
- a) Diseñar y desarrollar, una vez aprobado, el programa individual de ejecución de medida. La Subdirección General de Ejecución de Medidas Judiciales de la Agencia supervisará este desarrollo y valorará conjuntamente con la entidad adjudicataria la ejecución de la medida.
 - b) Preparar y gestionar los medios y recursos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas.
 - c) Realizar las actuaciones de apoyo y refuerzo de las actividades de aprendizaje y formación que cada menor/joven infractor requiera.
- 4.6 La entidad adjudicataria no podrá, en ningún caso, dar publicidad de las intervenciones (publicaciones, estadísticas, memorias, etc.), sin la autorización previa de la Agencia.
- 4.7 La entidad adjudicataria cuidará especialmente de que en los recursos asignados a la ejecución del contrato no se posean ni consuman drogas o cualquier otro producto o sustancias tóxicos, ni se posean utensilios e instrumentos que puedan suponer un riesgo para la seguridad de los menores o del personal del servicio.

5 Relativos a los gastos inherentes a la prestación del servicio.

La entidad adjudicataria se hará cargo de todos los gastos derivados de la atención de los menores/jóvenes, de la limpieza, mantenimiento y control de la seguridad del recurso, del instrumental, equipamiento necesario y desplazamiento para la realización de las prestaciones en beneficio de la comunidad.

6 Relativos a la seguridad, limpieza y mantenimiento.

La entidad adjudicataria deberá garantizar la seguridad de quienes se encuentren en el interior de las instalaciones de la entidad adjudicataria, en todo caso, durante el horario de prestación del servicio. Para ello dispondrán de un sistema de vigilancia que permita garantizar la atención inmediata sobre cualquier situación de conflicto que se produjera o situación de riesgo que pudiera surgir en el interior de las instalaciones.

La entidad adjudicataria deberá garantizar que las instalaciones y recursos asignados a la ejecución del contrato se encuentren en todo momento en perfecto estado de higiene, limpieza y mantenimiento, en cumplimiento en todo momento la normativa existente al respecto, llevando a efecto las reparaciones y sustituciones que fueran precisas.

7 Relativos al personal.

- 7.1 Sobre la base del personal susceptible de subrogación que se figura reflejado en el Anexo I del presente Pliego, la entidad adjudicataria deberán contar, para la prestación del servicio, con el personal estipulado que se detalla a continuación. Dicho personal poseerá la preparación técnica precisa y contará con la titulación necesaria para el desempeño de cada puesto de trabajo. En consecuencia, cualquier incidencia relativa a la contratación o sustitución de personal deberá ser comunicada a la Subdirección General de Ejecución de Medidas Judiciales a la que se hará llegar el correspondiente “curriculum vitae”.
- 7.2 Dicho personal dependerá exclusivamente de la entidad adjudicataria, la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleadora, siendo la Agencia, y, por extensión la Administración de la Comunidad de Madrid, ajena a las relaciones laborales que por tal motivo se generen.
- 7.3 Con independencia de que el personal sea susceptible de subrogación, con carácter previo al inicio de la ejecución del servicio, la entidad adjudicataria enviará a la Agencia, para su conformidad, la relación de personal destinado a la prestación del servicio, con indicación de jornada, titulación, cualificación y funciones. La Agencia será informada, además, de cualquier cambio que se pretenda efectuar en el personal

contratado para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del cumplimiento del presente contrato.

- 7.4 La incorporación de cualquier efectivo de la entidad adjudicataria a la prestación del servicio, exigirá el cumplimiento de lo establecido en la disposición CUARTA “Recursos humanos” del presente pliego.
- 7.5 Las bajas que se produzcan entre el personal deberán ser cubiertas a la mayor brevedad y puestas en conocimiento inmediato de la Agencia.
- 7.6 Por parte de la entidad adjudicataria se procurará dotar al personal de la mayor estabilidad posible durante la ejecución del servicio, al objeto de preservar la intervención a realizar con los menores y jóvenes que estén ejecutando una medida judicial.
- 7.7 Para la prestación de los servicios descritos, la entidad adjudicataria contará, como mínimo, con el siguiente equipo de trabajo:

Profesionales	
DIRECTOR-COORDINADOR	1
PSICÓLOGO	1
EDUCADOR/TÉCNICO DE INTERVENCION EN MEDIO ABIERTO	11

A efectos de subrogación, de conformidad con lo establecido en el artículo 34.1 del V Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores, de 3 de diciembre de 2024 (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2024), en el caso de que se produzca un cambio en la entidad adjudicataria del contrato administrativo, la nueva entidad adjudicataria quedará subrogada en los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores susceptibles de subrogación, de modo que deberá respetar su modalidad de contrato, grupo profesional, jornada, horario, antigüedad e importe total de salarios, tanto los regulados en el citado Convenio, apartado a) del artículo 66, como extraconvenio.

Todo el personal adscrito a la ejecución del contrato habrá de contar con una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y de las condiciones generales de ejecución del servicio reflejadas en la cláusula quinta del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

8 Relativos al reglamento de régimen interno.

Para la regulación de la participación de los menores y jóvenes infractores en las actividades del servicio objeto del presente contrato se deberá contar con un reglamento de régimen interior que deberá ser previamente autorizado por la Agencia y que será el mismo en todas las instalaciones puestas a disposición por la entidad adjudicataria para la prestación del servicio.

Este reglamento regulará, como mínimo, los siguientes aspectos: denominación del Servicio, entidad prestadora del mismo, normas de funcionamiento del servicio, horario de funcionamiento del servicio, derechos y deberes de los de los menores, normas de convivencia, régimen disciplinario.

Asimismo, en cada una de las instalaciones que la entidad adjudicataria ponga a disposición del servicio, deberá existir un libro de quejas/peticiones que se pondrán a disposición de quienes las soliciten. Así mismo, deberán contar con un buzón de sugerencias situado en un lugar visible de las instalaciones.

9 Relativos a las memorias e informes de ejecución de la medida.

9.1 Durante los 5 primeros días del mes inmediatamente posterior, la entidad adjudicataria presentará a la Subdirección General de Ejecución de Medidas Judiciales de la Agencia una memoria mensual en la que se refleje la actividad mensual del servicio objeto del contrato, así como las características generales de la población atendida, las actividades desarrolladas y sus resultados, y sobre cualquier otro aspecto relevante relativo a la prestación del servicio.

Estas memorias mensuales serán complementadas por parte de la entidad adjudicataria con otra memoria más amplia y detallada de la actividad anual. La memoria anual es el documento de carácter evaluador en el que se reflejarán el conjunto de las actuaciones desarrolladas durante el año inmediatamente anterior, los resultados obtenidos, su valoración cualitativa y las propuestas de mejoras futuras. La información reflejada deberá responder a criterios de elaboración homogéneos que se establecerán por la Agencia.

La memoria anual se remitirá a la Agencia en el primer mes del año siguiente a aquél al que se refiera dicha memoria.

9.2 Asimismo, cumplimentarán los soportes documentales establecidos por la Agencia.

10 Relativos a los documentos e informes de los menores y jóvenes atendidos.

El programa individual de ejecución de la medida, los informes de seguimiento e incidencias, sus evaluaciones y el informe final, las citaciones y toda la información recibida sobre el menor estará en el expediente personal del menor custodiado por la Agencia, y sólo tendrán acceso a los mismos los profesionales designados como responsables de la ejecución de la medida.

Finalizado el período de vigencia del presente contrato los archivos de la entidad adjudicataria en que estén depositados la información imprescindible para la ejecución del contrato y relativa los menores y jóvenes atendidos, habrán de ser puestos a disposición de la Agencia, en soporte digital, en el plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a la finalización. No deberá quedar en la entidad adjudicataria ni en los inmuebles en que se prestará el servicio ninguna documentación de los menores o jóvenes atendidos ni a la finalización del contrato ni una vez que se produzca la baja de cualquier menor atendido.

SEXTA. Coordinación, control, supervisión e información de la prestación del servicio.

1. La Agencia llevará a cabo la directa supervisión de la prestación del servicio contratado, su control y coordinación con la entidad adjudicataria, a través Subdirección General de Ejecución de Medidas Judiciales.

2. La entidad adjudicataria designará un responsable del servicio, quien responderá de la prestación realizada y recibirá y ejecutará las indicaciones que la Agencia, a través de la Subdirección General de Ejecución de Medidas Judiciales estime oportuno señalar en relación con la prestación del servicio, debiendo tener atribuciones suficientes para adoptar, en su caso y al momento, las decisiones necesarias para asegurar el buen funcionamiento del mismo.
3. La entidad adjudicataria viene obligada a informar a la Agencia, a través de la Subdirección General de Ejecución de Medidas Judiciales, y por escrito, sobre cualquier incidencia significativa que surja en el desarrollo y prestación del servicio en el día en que se produzca, así como a facilitar puntualmente cuanta información le sea requerida en relación con la misma.

SÉPTIMA. Colaboración mutua y difusión.

Ambas partes se comprometen a colaborar de manera activa en todos aquellos aspectos relacionados con la atención a menores o jóvenes atendidos, llevando a cabo intercambios de cuanta información, conocimientos y experiencia posean para la mejor atención de los menores o jóvenes y la adecuación de los recursos a las necesidades de cada momento.

La difusión que se lleve a cabo de la prestación del servicio objeto del contrato, ya sea a través de material impreso o de cualquier otro soporte divulgativo, deberán contar con el logotipo de la Agencia y su autorización, figurando la entidad adjudicataria de acuerdo con los cometidos que lleva a cabo en virtud del presente contrato y de la participación que haya tenido en el tema objeto de divulgación.

La participación de la entidad adjudicataria y del personal a su servicio en cualquier ponencia, conferencia, coloquio o mesa que tenga relación con la prestación del servicio objeto del contrato, deberá ser puesto en conocimiento y previamente autorizado por la Agencia.

OCTAVA. Obligaciones del adjudicatario.

1. Prestar, de manera eficaz y diligente, la atención a los menores y jóvenes designados por la Agencia, con una intervención desde un punto de vista socioeducativo o

terapéutico de acuerdo con las prescripciones contenidas en este contrato.

2. Mantener los recursos asignados a la ejecución del contrato y sus instalaciones en condiciones normales de funcionamiento.
3. Informar de forma inminente a la Agencia de cualquier incidencia que se produzca en la atención de los menores o jóvenes, comunicándolo por cualquier medio que asegure su inmediata recepción, sin perjuicio de que, según su naturaleza, deba ponerla en conocimiento, además, de los Órganos judiciales o policiales correspondientes.
4. Facturar los importes mensuales, previa conformidad de la Agencia, de los servicios prestados.
5. Facilitar el ejercicio de las facultades administrativas de inspección, supervisión y control de los recursos asignados al servicio objeto del presente contrato.
6. Contratar una póliza de Responsabilidad Civil que cubra la actividad de la Entidad (incluyendo la de sus empleados), así como una póliza de Accidentes para los menores que realicen actividades y tareas en beneficio a la comunidad.
7. De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la ley de 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, realizará la planificación, seguimiento y control de la implantación de la Evaluación Inicial de Riesgos Laborales, realizado por el Servicio de Prevención de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, la entidad adjudicataria contratará la realización y puesta en marcha del Plan de Emergencia o Autoprotección y Evacuación, así como las sucesivas implantaciones.

NOVENA. Comisión de Seguimiento.

Para facilitar la evaluación de los programas y la propuesta de mejora de las actuaciones se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará presidida por el titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia o persona en quien delegue, y formada por dos representantes de la Agencia y dos representantes de la entidad adjudicataria. Esta Comisión

se reunirá cuantas veces sean necesarias para cumplir sus cometidos, haciéndolo, al menos una vez al año y cuantas veces se convoque por la presidencia o a petición motivada de cualquiera de sus miembros. De cada reunión se levantará un acta con los temas tratados y los acuerdos alcanzados.

Actuará como secretario de la Comisión, con voz pero sin voto, un funcionario de la Agencia.

DÉCIMA. Protección de Datos de Carácter Personal.

Normativa aplicable.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante, RGPD).

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa de desarrollo que sea de aplicación.

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Ley 3/2004, de 10 de diciembre, de creación de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor.

La Agencia y la entidad adjudicataria declaran expresamente que conocen y quedan obligadas al cumplimiento de la normativa aplicable en esta materia.

Responsabilidades sobre el tratamiento de datos personales

La entidad adjudicataria deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que se tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se hubiese dado dicho carácter por el órgano de contratación, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. En consecuencia, el adjudicatario habrá de impartir las instrucciones oportunas a su

personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte informático, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en la que se desarrollen sus actividades.

La Administración no podrá divulgar la información facilitada por el adjudicatario designada por ellos como confidencial y acordada así por el órgano de contratación.

El adjudicatario tendrá prohibido el acceso a los datos personales que en cualquier soporte obren en las dependencias de la Administración a que pudiera tener acceso por razón de la prestación y que no estén directamente relacionados con la correcta ejecución de la misma. En consecuencia, el adjudicatario deberá impartir las instrucciones precisas a su personal.

Para los casos en que la ejecución del contrato origine la comunicación por el adjudicatario a la Administración contratante de datos de carácter personal de sus empleados o de cualquier otro dato de carácter personal, el adjudicatario se compromete a:

- No comunicar datos personales sin el consentimiento de las personas físicas interesadas, o, su caso, sin la concurrencia de alguna otra de las condiciones de licitud o bases de legitimación alternativas establecidas por el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
- Informar a las personas físicas a que se refieran los datos personales de todos los extremos que exige el artículo 14 del RGPD.
- Cumplir con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre y el Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre, así como con cualquier otra obligación que corresponda conforme a la normativa que, en cada momento, esté vigente en esta materia.

En caso de incumplimiento de las citadas obligaciones, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se le irroguen a la administración contratante, incluido el importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran serle impuestas.

Madrid, a fecha de firma

LA DIRECTORA-GERENTE

Firmado digitalmente por: LOPEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR
Fecha: 2026.04.17 09:19

Fdo.: Pilar López González

ANEXO I

PERSONAL SUSCEPTIBLE DE SUBROGACIÓN

RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO EN LA ACTUALIDAD

Categoría	Contrato	Jornada	F. Antigüedad	
Coordinador	Indefinido	100%	14/05/2010	
Psicólogo	Indefinido	100 %	16/12/2019	
Educador/ Técnico LV	Indefinido	100%	01/04/2009	
Educador/Técnico LV	Indefinido	100%	30/08/2022	
Educador	Indefinido	100%	23/12/2015	
Educador/	Indefinido	100%	01/04/2006	
Educador	Indefinido	100%	03/07/2023	
Educador	Indefinido	50%	24/09/2024	
Educador	Indefinido	50%	28/09/2022	
Educador/Técnico LV	Indefinido	100%	01/08/2012	
Educador/Técnico LV	Indefinido	100%	21/04/2025	
Educador	Indefinido	50%	02/02/2024	
Educador	Indefinido	50%	15/04/2025	
Educador	Indefinido	50%	15/09/2025	

Fdo.: La entidad


FRANCISCO
JAVIER
DOVAL (R:
G83169524
)

Firmado
 digitalmente por

FRANCISCO
JAVIER DOVAL (R:
G83169524)
 Fecha: 2025.12.22
 15:00:11 +01'00'

